**INTEGRALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**Palabras clave:** Derechos Humanos, Colombia, Misión ONU, grupos irregulares

**Número de palabras:** 945

Se nos vino encima una intensa labor de deslegitimación de los logros alcanzados por el Estado durante la era Uribe. Prejuicios que de tanto repetirse van quedando como verdades establecidas. Uno de ellos es el que distorsiona el orden de lo sucedido en la época del despeje y en la zona de distensión. Hay quienes afirman que fue el estado colombiano el que optó por la opción militar, más precisamente, que fue el fascista y “paraco” Uribe el responsable de ese camino –la seguridad democrática- que significó el cierre de la posibilidad de “una salida política negociada al conflicto social y armado”. Consideran un error, cuando no una injusticia, desconocer estatus de beligerancia a las guerrillas e insisten en que estas son la consecuencia de profundas injusticias sociales. Se niegan a calificar como crímenes de guerra o terrorismo sus acciones violentas contra la población civil y más bien hablan del interés altruista. Hasta un candidato presidencial llegó a sostener que no era lo mismo matar por altruismo que por fines egoístas como si en Colombia no estuviésemos fastidiados con todas las violencias. Piensan que mientras no haya justicia social no habrá paz, otorgándoles a estos grupos la representación de lo social o de las aspiraciones de bienestar de los pobres del país.

Otra bandera tiene que ver con la concepción del problema de violencia vivida por el país durante las últimas décadas. El relato se basa en la presunción de que el Estado es el mayor violador de los derechos humanos, el propiciador de la guerra sucia, responsable de la existencia de los poderosos grupos paramilitares en quienes se apoyó para derrotar a las justicieras guerrillas y sembrar pánico y terror entre la población civil. En este libreto, la guerrilla es presentada como víctima en vez de victimaria, no es culpable del horror vivido. A la luz de esta idea reduccionista y parcializada, no cabe negociar con los grupos de autodefensa, la Ley de Justicia y Paz con la que se coronó la desmovilización de más de 30 mil paramilitares debe ser declarada ilegal, la justicia alternativa es un embeleco y la extradición de los jefes fue un error para ocultar la verdad. No aceptan que en los últimos cinco años se saben más verdades que en las cuatro décadas anteriores. Según ellos, el país vive la más grave crisis humanitaria de su historia. Este discurso se divulga por el mundo y entre los principales organismos internacionales defensores de los DDHH y gana juicios amparado en esta versión. La guerrilla es silenciada y sus atropellados omitidos o minimizados. En Colombia se resalta la alianza de políticos corruptos con grupos paramilitares mientras se considera que la cercanía con las guerrillas o su vocería es buena *per se*. No importa distorsionar los tiempos de ocurrencia de muchos hechos delictivos con el fin de enlodar al que consideran el gran verdugo, Uribe Vélez. Según este relato, la alianza entre congresistas y autodefensas tuvo lugar entre el 2002 y el 2010 no antes. No reconoce que los magnicidios son cosa del pasado y que la izquierda ha vivido su mejor momento en los últimos ocho años. Con relación al “intercambio humanitario”, los mayores críticos de la Fuerza Pública quisieron fungir como defensores de la liberación de los soldados secuestrados por las Farc, además, los llamaban prisioneros de guerra. En vez de condenar a la guerrilla por la práctica sistemática del secuestro de civiles, mantenerlos en cautiverio por años bajo condiciones infrahumanas, le echaban la culpa al gobierno por no ceder al chantaje y lo tildaban de insensible. No en pocos casos revisten sus opiniones políticas con el manto de investigaciones académicas. Más de una ONG y más de un político e intelectual amnistiado por su pasado guerrillero, manchado por el secuestro y otros crímenes, escriben en los principales diarios, hablan por las grandes emisoras, tienen espacios abiertos en la tele, publican libros y tienen un poder de opinión para hablar de lo divino y lo humano, dictar cátedra de paz, DDHH, justicia y ética. Y lo más grave, no se les puede discutir nada, ni hablar con nombres propios porque arman el alboroto quejándose de que así se les estigmatiza y se abre campo la amenaza contra sus vidas.

El jefe de la Misión de la ONU y PNUD en Colombia, Bruno Moro, cual político criollo, escribió una columna (El Tiempo, 08/08/10) en la que además de “tirar” línea programática al nuevo gobierno le recuerda el reto de proteger y promover los DDHH ante las amenazas contra sus defensores. Nadie le puede negar, en estricto rigor y justicia, su derecho a solicitar respeto. Es su misión. Pero, no debe olvidar que los DDHH tienen un carácter universal y que no deben ser usufructuados por ninguna tendencia ni ser objeto de manipulación con fines políticos ordinarios o para encubrir acciones de agitación y propaganda. Se pregunta uno, en todo derecho también, como ciudadano, con el debido respeto pero con toda libertad, ¿qué carajos hace una ONG de DDHH demandando la ley de la segunda reelección, tema totalmente político? ¿por qué un miembro de esa ONG que fue guerrillero y secuestrador amnistiado agita y azuza a las gentes en las calles en el juicio contra un coronel por los hechos del Palacio de Justicia?, ¿No es un exabrupto que esa ONG denuncie al ex presidente Uribe por traición a la patria? Concibo que en el campo de las funciones del señor Moro, tan presto para recordarles deberes a los gobiernos, esté la de conminar a las ONG y a los promotores de la venganza el deber de respetar el carácter universal y altruista de los derechos humanos.

**Darío Acevedo Carmona**

Medellín, 22 de agosto de 2010